

oficina federal, cual es la casa de moneda de Culiacán, bajo la garantía de que sería recibida por el valor que se le dió, no solo por los particulares, sino también por las autoridades que le dieron curso legal y forzoso; y que de esta garantía se privaría á los tenedores de la moneda de cobre, sin previa indemnización, excluyéndola del pago de los impuestos que recaudan las oficinas; con fundamento de los artículos 27 y 101 fracción 1ª é igual fracción del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve:

Que la Justicia de la Unión ampara y protege á los Señores Echegúren Hermanos y Compañía, contra el acto del Administrador de la Aduana Terrestre de este Puerto, por el que se niega á recibirles en moneda de cobre el pago de 200 pesos 76 centavos que adeudan por contribución federal sobre varios impuestos directos del Estado.

Hágase saber: remítanse copia de esta sentencia y del pedimento fiscal al *Semanario Judicial*; la correspondiente al periódico de esta Ciudad, y los autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales. El suplente 2º del Juzgado de Distrito de Sinaloa, lo decretó, mandó y firmó. Doy fé.—*Joaquín García*.—*Francisco Medina*, Secretario.

Es copia. Mazatlán, Diciembre 4 de 1874.—*Francisco Medina*, Secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 28 de 1874.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Sinaloa por los Sres. Echegúren, Hermanos y Cª, contra el Administrador de la Aduana terrestre de Mazatlán, que se niega á recibirles en moneda de cobre la suma de 200 ps. 76 cs. que adeudaban por contribución federal, correspondiente á impuestos directos con que están gravados su giro y propiedades. Vista la sentencia del Juez de Distrito, que

amparó á los quejosos, y las demás constancias que obran en autos; de conformidad con lo dispuesto en la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta:

Que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Sinaloa, en 23 de Noviembre del año próximo pasado, amparando á los quejosos.

Devuélvanse los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José Mª Iglesias*.—*M. Auza*.—*Ignacio Ramírez*.—*Ignacio M. Altamirano*.—*S. Guzman*.—*L. Velazquez*.—*M. Zavala*.—*José García Ramírez*.

Certifico: Que el C. Ministro Juan J. de la Garza intervino en la votación de este amparo, y que por haberse ausentado de esta capital antes de firmar la sentencia anterior, no aparece en ella su firma.

México, Marzo 4 de 1875.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico, México, Marzo 5 de 1875.—*Lic. Enrique Landa*, Oñcia mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro, por D. Ramon O. Eciliú, en representacion de su padre D. Hermenegildo del mismo apellido, contra el auto dictado por el juez de Letras del ramo Civil de la capital de ese Estado, por violacion de garantías.

Pedimento del C. promotor fiscal.

C. Juez de Distrito del Estado.

El Promotor-fiscal dice: Que de las prue-

bas rendidas en este juicio, consta que en la diligencia de embargo que tuvo lugar en 15 de Setiembre último, fué requerido el C. Ramon O. Feliú, para que presentase bienes muebles antes que raíces y créditos, en el negocio ejecutivo que contra él sigue D. Luis Mutuverria.

Es bien sabido, que conforme al derecho comun, no se puede invertir el Orden del señalamiento; pero lo que no supo el actor, fué el modo de obligar al ejecutado á que respetase esa prescripcion. Dada cuenta al C. Juez de Letras, resolvió, en un extenso auto motivado, lo que por declaracion general ya conocian las partes; es decir, que no puede invertirse el Orden de los términos de la ejecucion; pero incidió en el mismo error que el actor, manifestando empeño en la manera de querer conservar ese Orden, obligando al demandado á que directamente no lo invirtiese. En efecto: la práctica coonstante y no interrumpida de los Tribunales, enseña, que no señalando el demandado bienes muebles, pasa al actor el derecho de hacerlo, sucediendo lo mismo en su caso con los raíces y las acciones. Esta práctica fué del todo desatendida en la diligencia de embargo y auto prescritos.

En virtud de éste, siguiendo adelante el ciudadano Juez su extraviado camino, mandó se procediese á nuevo embargo, en el que Feliú señaló ganado vacuno para que se hiciese efectivo, trabándose entonces ejecucion ilusoria en las vacas, que fueron suficientes por su valor á cubrir la cantidad porque se le requiere, reservándose el nombramiento de depositario, llegado el caso en que se perfeccione el embargo.

Del auto referido apeló el C. Feliú; fuéle admitido el recurso en el efecto devolutivo, quedando expedita la accion del ciudadano Juez para proseguir el juicio. Así aparece de los justificantes de su informe, en el que agrega: que con falsedad se ha asentado que la alzada no fuera calificada por el Juez *ad quem*, segun lo previene la

Ley orgánica de administracion de justicia del Estado.

Cree el quejoso que con estos procedimientos, se ha violado el art. 16 de la Constitucion, y ha interpuesto en consecuencia, el amparo correspondiente.

Así mismo alega, que se cobran costas judiciales, de lo que no hay constancia alguna en autos; de manera que no hay necesidad de ocuparse de la supuesta violacion del art. 17, cuando el actor no ha probado su intencion.

Por mas que se reflexione sobre los hechos inducidos, nunca se podrá llegar á la conviccion de que importen una garantía violada. La Constitucion no precave á los individuos de toda injusticia, sino únicamente de aquellas que traen consigo la alteracion de las relaciones entre el poder y los gobernados. En una palabra, el art. 16, cuando habla de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, trata de elevar la division de los poderes públicos á garantía individual; mas no de hacer revisables todos los actos de éstos por el judicial de la Federacion, para que éste declare si son ó no conformes, no ya á la Constitucion, sino á las mismas leyes de los Estados. Así se deduce de los arts. 39, 40 y 41, que les confiere entera soberanía en lo tocante á su régimen interior, lo que trae consigo la facultad de decidir por sus propias autoridades, las cuestiones que se susciten entre sus habitantes. Así se infiere de la significacion de la palabra «soberanía», tomada en su sentido lato, y del art. 97 de la Constitucion, que únicamente exceptúa de la jurisdiccion de los Estados, las controversias sobre el cumplimiento de leyes federales, las de derecho marítimo, las propias de la Federacion, las que susciten entre dos ó mas Estados, las que haya entre un Estado y uno ó mas vecinos de otro, y las originales de los tratados y consernientes, á los agentes diplomáticos y cónsules, supuesta la regla del artículo 117, que entiendo reservadas á

aquellos, las facultades no concedidas expresamente á los funcionarios federales.

Resulta en efecto del principio de independencia de los Estados, que la organizacion y la competencia de las autoridades, no puede depender ni de los poderes de la Federacion, ni de los de algun otro Estado, sucediendo lo mismo respecto de las formalidades que deben observar las partes para introducir y proseguir una accion delante de aquellas; quienes tienen que dar sus decisiones conforme á reglas cuya sancion se deriva necesariamente de las leyes territoriales. De otro modo, estas autoridades dependerian de hecho de la Federacion ó distinto Estado, cuyas leyes les marcarian su conducta. Estas formalidades se conocen bajo el nombre de *ordnatoriae litis*, á diferencia de las que tocan el fondo de la cuestion y se llaman, *decisoriae litis*; rigiéndose como los contratos por el principio: *Locus regit actum*. Los autores usan de los términos técnicos siguientes, cuando apuntan esa distincion: *eaque litis formam concernunt de ordinationem et eaque spectant decisoria causa et litis decisionem*. "Hay, dice Merlin, dos especies de formalidades judiciales: las unas que pertenecen solamente á la instruccion y solo son relativas al procedimiento, razon por la que los jurisconsultos las denominan *ordinatoria litis*; las otras pertenecen al fondo de la causa; y su omision ó ausencia neutraliza ó anula la accion, designándolas los jurisconsultos con el nombre de *decisoria litis*." (Merlin, repertorio artículo «Prueba» se. c2 párt 3.)

Conforme á los principios admitidos en materia de soberanía, las formas de proceder ante los Tribunales, se rigen por la ley del país en que se ha puesto la demanda, y supuesto que los jueces ejercen en su plenitud la jurisdiccion contenciosa, necesaria para decidir y llevar á puro y debido efecto sus decisiones, no se concibe que pueda coartárseles sin faltar al contexto del 17º mandamiento constitucional, en la parte que previene que los Tribunales es-

tén siempre expeditos para administrar justicia.

Los de Querétaro están por hoy cerrados para D. Luis Mutuverria, parte adversa de Feliú, en el juicio ejecutivo que ha dado lugar á este recurso.

La distincion entre la jurisdiccion contenciosa y la voluntaria ya conocida en derecho romano (lib. 2, D. de offic. procons.) ha pasado al contemporáneo. La jurisdiccion contenciosa tiene por objeto el exámen y decision de causas litigiosas, así como la ejecucion de sus decisiones; mientras que la voluntaria se ejerce en los negocios que no ofrecen contestacion, en los cuales la persona encargada del ejercicio de ésta jurisdiccion, no tiene mas que acordar una confirmacion ó un atestado público.

Los autores del repertorio de Jurisprudencia, se expresan á este respecto en los siguientes términos: «Se llama jurisdiccion contenciosa por oposicion á la voluntaria ó graciosa, la que ejerce con relacion á dos ó mas partes cuyas pretensiones siendo opuestas, llevan á una sentencia con ventaja de una en perjuicio de la otra.» (Art. juridic. contenc.)

Henrion de Paucy, siguiendo á Henricio se expresa así: «El Juez ejerce jurisdiccion contenciosa, cuando pronuncia sobre intereses opuestos, entre los contradictorios debates de las partes. Lo que hace á petición de un solo individuo, ó de varios acordados entre sí, pertenece á la jurisdiccion voluntaria.» (Tratado de la autoridad Judicial en Francia, cap. 14.) «La razon de la diferencia entre las dos especies de jurisdiccion, dice Merlin, es que el Magistrado procede en virtud de la jurisdiccion voluntaria, cuando pronuncia sobre una demanda que sea por su naturaleza, sea segun el estado de las cosas, no es susceptible de contradiccion.» (Repertorio, art. Jurisdic. graciosa.)

La frase administrar justicia, abraza ambas jurisdicciones, y especialmente la contenciosa, y no se concibe como pueda un

Tribunal de la Federación, suspenderla por vía de amparo de garantías individuales, sin infringir el 179 art. constitucional.

Usando del tecnicismo alemán, copiado del romano, los Jueces de un Estado, reúnen la jurisdicción y el imperio, *jurisdictionem et imperium*, es decir, tienen el poder de decidir el pleito, y el de ejecutar sus decisiones y las de otros Tribunales del mismo Estado. No se concibe, primeramente la Soberanía de los Estados, y en segundo lugar la independencia de su respectivo poder judicial; sin el pleno ejercicio de la jurisdicción y el imperio, que entre nosotros no tiene mas límites que la Constitución, ley Suprema á que deben arreglarse todos los jueces y Tribunales (art. 126 de la Constitución,) y no se nos mostrará en ella artículo alguno que trate sobre ejecuciones é inversión del orden en el señalamiento de los bienes embargados; materias propias de la legislación del Estado, cuyo poder judicial decide, ó al ménos debe decidir, no solo sobre todas las causas que nacen de su derecho común, sino tambien de su particular Constitución.

Si se examina lo que se hace en cada Estado, dice Story, se verá que es un uso reconocido, que el poder judicial de los Estados pronuncia en último recurso sobre las cuestiones constitucionales en litigio. Este uso ha sido mantenido siempre como el ejercicio de una autoridad legítima y concluyente para el Estado entero; ha sido siempre aprobado por el pueblo, y nunca éste convocado para revisar la Constitución, ha tratado de quitar esta autoridad á los Tribunales de Justicia, por medio de enmiendas á la Constitución. En todos los Estados el pueblo ha mirado siempre esta última apelacion al poder judicial, como la garantía de sus derechos y libertades, y como estando en perpétua armonía con toda la jurisprudencia del derecho común. (Comment. abr. núm. 216.)

Sin conculcar los principios expuestos, no puede concederse el amparo solicitado.

Querétaro, 17 de Noviembre de 1874.
—Luis Castañeda.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Querétaro, Diciembre 17 de 1874.

Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Ramon O. Felú, como apoderado del Sr. su padre D. Hermenegildo del mismo apellido, contra el auto del C. Juez de Letras de lo civil de ésta capital, que libró ejecución contra su representado, por nuevas rentas vencidas por la Panadería Española, sin haber precedido el juicio correspondiente, y haciendo extensiva á mas de lo que se decidió en una sentencia de remate ya ejecutoriada, que contra el repetido su representado, se pronunció en otro juicio de la misma naturaleza; condenando ademas al quejoso en las costas causadas en esa nueva ejecución, por todo lo cual cree se han violado las garantías que á todo hombre conceden los arts. 16 y 17 de la Constitución Federal; lo alegado en el escrito en que se introduce el recurso; los informes rendidos por la autoridad ejecutora; lo que expuso el fiscal en los traslados que se le corrieron; las pruebas rendidas; lo que en vista de éstas expusieron las partes en sus respectivos escritos; la citacion para sentencia y todo lo demás que verse y tenerse presente debía.

Considerando: Que el presente juicio se ha promovido por infracciones que el C. Ramon Felú asegura que cometió el C. Juez de lo civil de ésta Capital, de los arts. 16 y 17 de la Constitución Federal, violándose las garantías individuales que ellos establecen, lo cual ofreció probar: que por lo mismo, era inconcuso procedia el amparo, y en ello estuvo conforme el C. Promotor fiscal, expresándolo así á la foja 16 de estos autos:

Que en virtud de lo dicho, el Juzgado de Distrito era el competente para conocer en el juicio respectivo, conforme al art. 19 frac. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Considerando: Que para fundar el quejoso la infracción del art. 16, alega: 1º La incompetencia del citado juez, aunque incidentalmente, sin haberla probado en estos autos. 2º Que se decretó el embargo de bienes, desentendiéndose de la apelación que interpuso, lo cual tampoco está probado; y 3º Que no se concedió al mismo Feliú la designación de los bienes del embargo decretado, sino que se le obligó a señalar mueble de su hacienda, lo cual aunque sea cierto, tampoco está prohibido por el art. 16 de la Carta Federal.

Considerando: Que á efecto de probarse la propia infracción del artículo que se acabó de citar, se alegó por el C. Feliú, que el auto de embargo del juez de lo civil, aunque dictado por escrito, no contiene la causa legal del procedimiento, circunstancia indispensable según el tenor literal del repetido artículo constitucional.

Considerando: Que el auto que produjo la queja del C. Feliú, es el de 11 de Setiembre del año corriente, copiado á fjas 19 en el informe con justificación que rindió el predicho juez de lo civil, donde expresa éste funcionario que lo dictó como una consecuencia de la sentencia de remate de 13 de Junio de 1872, testimoniada á fs. 56 y 59, teniendo presente, que desde aquella época, pidió el actor Mutuverría, que mensualmente lo amplexase la ejecución á las rentas que fueran venciendo, puesto que su cobro era de las rentas mensuales de la Panadería Española que tenía en arrendamiento el Sr. Feliú.

Considerando: Que la citada sentencia de remate, condena al pago de la cantidad fija de seiscientos y tantos pesos de rentas, hasta entónces vencidas, y al de un seis por ciento que por indemnización de perjuicios debía también satisfacer Feliú, en proporcion al tiempo que corriera hasta el día del recibo de aquellas, y de ninguna manera comprendió las rentas futuras, haciendo de éstas un punto omiso, si es que el actor había pedido algo acerca de ellas.

TOMO VII—PARTE II.

Considerando: Que si la expresada sentencia de remate del año de 1872, nada resolvió acerca de las rentas futuras, el nuevo embargo no puede tenerse como comprendido en ella; resultando de aquí, que la causa en que se fundó el auto de 11 de Setiembre, es visiblemente falsa, y cuando ésto sucede, es lo mismo que no haberla.

Considerando: Que en efecto, el art. 16 de la Constitución, requiere que la orden de la autoridad, *funde y motive la causa legal* del procedimiento; de que se infiere, que cuando no lo hace, ó expresa una *causa falsa*, la garantía que allí se establece queda violada, y da origen al juicio de amparo conforme al art. 101 de la Constitución de la República.

Considerando: Que en el caso de falsedad de la causa, importa nada menos en nuestro caso, la privación de toda defensa de parte del C. Feliú, por la evidente razón de que, así como promoviéndose contra él, un nuevo juicio ejecutivo desde su principio, se le citaría en tiempo oportuno y se le oírían sus excepciones; así por la inversa, secuestrándoles sus intereses como por virtud de una sentencia ya dada, se llevaría la ejecución por la vía de apremio, en cuyo estado el que la sufre, nada puede alegar que le favorezca.

Considerando: Que el art. 16 de la Constitución, extiende la garantía de que habla, tanto á las personas como á sus papeles y posesiones, de manera que así como ninguno podría ser reducido á prisión por delito de robo, apoyándose la orden que se diera al efecto en la sentencia pronunciada, por el de heridas, así tampoco podrán secuestrarse sus bienes en virtud de una sentencia que no abraza el motivo por el cual se decretó un embargo.

Considerando: Que la infracción del art. 17 de la Constitución, atribuida al supradicho auto de 11 de Setiembre, no está justificada, porque allí se habló únicamente de las costas legales, sin que aparezca la cuenta de estas costas, ni pueda creerse hasta

hoy que se hayan comprendido las que están prohibidas por derecho, y así lo supuso el C. Juez de lo Civil; por tales razones y con fundamento de la Constitución general de la República y ley de 20 de Enero de 1869, el C. Juez 1º Suplente, dijo: Que se debía de fallar y falló:

1º Que se ampara al C. Ramon O. Feliú, como apoderado del Sr. su padre D. Hermenegildo del mismo apellido, contra el auto del C. Juez de lo Civil de esta Ciudad de Querétaro, de 11 de Setiembre del año corriente, por haber infringido el art. 16 de la predicha Constitución General.

2º Que no se ampara al C. Feliú por la infracción que dijo se cometió en virtud del art. 17 de la Carta Federal. Notifíquese esta sentencia á las partes, haciéndose la publicación respectiva, y elévese el expediente á la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su revision. Así definitivamente juzgando, lo pronunció, mandó y firmó por ante mí, el C. Juez de Distrito 1º Suplente, Lic. Mariano Pimentel.—Doy fé. *Mariano Pimentel.*—*Francisco Ruiz*, Secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 20 de Febrero de 1875.

Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro, por D. Ramon O. Feliú, en representación de su padre D. Hermenegildo del mismo apellido, contra el auto dictado por el Juez de Letras del ramo Civil de la Capital de ese Estado, ordenando proceder al embargo de bienes del quejoso, para cubrir las rentas vencidas del local que ocupa la panadería «La Española», y gastos judiciales, cuya providencia, así como los procedimientos del juicio en que fué dictada, violan, en sentir del quejoso, las garantías que consignan los artículos 16 y 27 de la Constitución Federal; y

Considerando: Que las infracciones constitucionales se hacen consistir, primero: en

la incompetencia del Juez de 1ª instancia, para conocer del negocio, por no haberse intentado antes la conciliación. Segundo: haber dictado el mismo Juez el auto de embargo, desatendiéndose de la apelación interpuesta por el quejoso. Tercero: que se ha obligado á este mismo á señalar determinados bienes para la traba de ejecución, no admitiéndose para este efecto los que habia designado en uso de la facultad que le concede la ley. Cuarto: no existir causa legal que pudiera servir de fundamento á los procedimientos del Juez mencionado. Quinto, y por último: que bajo el pretexto de gastos judiciales, se intenta exigir al solicitante las costas que abolió el artículo 17 del Pacto Federal.

Considerando, con respecto al primer punto: que el artículo 16 de la Constitución, en la parte que trata de la competencia de las autoridades, se refiere á la naturaleza de las funciones de éstas, y de ningún modo á los requisitos que en materia de procedimientos suelen exigir las leyes, para que un Juez, sin embargo de ser competente en un negocio, pueda dar entrada á este.

Considerando: con relacion á los puntos 2º y 3º: que el quejoso no ha demostrado ni aparece que puedan ser contrarios, al art. 16 citado, los procedimientos del Juez de Letras de Querétaro.

Considerando, que el repetido artículo 16 de la Constitución, exige solamente que la autoridad en todo mandamiento, exprese por escrito la causa legal del procedimiento, pero sin garantizar por esto la exactitud en las apreciaciones de la misma autoridad.

Considerando: que el quejoso no ha comprobado, ni hay motivo para creer, que con el nombre de gastos judiciales, se pretenda exigirle el pago de costas.

Considerando, en cuanto á las quejas y acusaciones que ante esta Suprema Corte ha presentado D. Luis Mutuerverría, contra los Ciudadanos Licenciados Mariano Pimentel, primer Juez Suplente, y Luis Castañeda, Promotor Fiscal del Juzgado de Distrito de

Querétaro, por sus procedimientos en este recurso, que no aparecen motivos para exigir la responsabilidad á dichos ciudadanos.

Por estas consideraciones y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal y 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta:

1º Se revoca la sentencia pronunciada por el Juez primer Suplente de Distrito de Querétaro, en 17 de Diciembre del año pasado, en la parte que concedió el amparo de la Justicia Federal á D. Hermenegildo O. Feliú, por violacion del artículo 16 de la Constitución, y se declara: que la justicia de la Union no ampara ni protege al mismo Sr. Feliú por este motivo.

2º Se confirma la misma sentencia en la parte que niega el amparo al mencionado O. Feliú, por infraccion del artículo 17 del mismo Código.

3º Se impone al quejoso una multa de 100 pesos.

4º Se declara no haber méritos para abrir juicio de responsabilidad á los Ciudadanos Juez primero Suplente y Promotor Fiscal del Juzgado de Distrito de Querétaro.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos, lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron:—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa,* Secretario.

Es copia que certifico.—México, 8 de Junio de 1875.—*Enrique Landa,* Oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por Faustino Rivera y otros, contra la Jefatura Política de aquella ciudad, por haberles mandado poner el grillete para extinguir su condena.

Pedimento del O. Promotor Fiscal.

Al Juzgado de Distrito:

El Jefe de Hacienda del Estado, desempeñando las funciones de Promotor fiscal por ministerio de la ley, dice: que Faustino Rivero, Vicente Ruiz, Vicente Quiroz, Pedro Alvarez, Macedonio Velazquez, Jesus García, Hilario Contreras, Domingo Campos, Apolonio Herrera, Severo Ramos, Santiago Basurto, Remigio Espinosa, Isidoro Diaz, Teodoro Rivas, Perfecto Rivas, Manuel Gutierrez, Justo Chavez, Antonio Landin, Florencio López, Antonio Magallanes, Magdaleno Aguilar y Félix Fernandez, presos en la cárcel de esta ciudad, piden amparo fundándose en que se encuentran atados con una cadena al pié, que arrastran por las calles públicas, lo cual constituye una pena infamante en contra de lo dispuesto en el art. 22 de la Constitución General, interpretado ya por la Suprema Corte de Justicia.

Admitido el recurso, se pidió informe á la autoridad política, quien manifiesta que los expresados individuos, fueron condenados unos por el Supremo Tribunal de Justicia, y otros por el Supremo Gobierno del Estado, quien los ha indultado de la pena capital que les fué impuesta, por el delito de robo con asalto; y que no habiéndose podido establecer el régimen penitenciario, fué preciso ponerles la cadena para asegurar su permanencia en la prision; pero estando demostrada con este procedimiento la infraccion del citado artículo constitucional, el Jefe de Hacienda pide